

Territorio y derechos ambientales

8

Balance de las recomendaciones anteriores

En 2018, Noruega recomendó prevenir e investigar todas las agresiones a defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios, incluidos sindicalistas, líderes indígenas y defensores del medio ambiente; y llevar a los responsables ante la justicia. De acuerdo con Indepaz (2022), 712 personas defensoras ambientales han sido asesinadas desde la firma del AFP (1). De ellos, 364 son indígenas, 93 son afrodescendientes, 122 campesinos, 25 son activistas ambientales y 108 miembros de Juntas de Acción Comunal (2).

Desafíos

Conflictos socio ambientales. De acuerdo con Indepaz (2022), en Colombia se presentan más de 160 conflictos ambientales por megaproyectos minero energéticos, agroindustriales y de infraestructura (3). Las comunidades afectadas se enfrentan a abusos de poder a través de normas, discursos, fuerza física, negación a la participación, omisión institucional y procesos de captura corporativa (4). Las autoridades ambientales omiten principios de protección ambiental, precaución y participación y otorgan licencias de exploración y explotación que generan graves violaciones a derecho humanos, derechos ambientales y de la naturaleza, como privatización y afectación de fuentes hídricas, fauna y flora; vulneración de los derechos a la consulta y consentimiento libre previo e informado; desplazamientos, desterritorialización y despojo; violencias basadas en género; pérdida de las economías propias e identidades sociales y culturales; agresiones de líderes/as ambientales. La presencia de grupos armados ilegales y militarización de los territorios agrava la situación ambiental en el país.

Acceso al agua potable. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda (2023), 12 millones de personas en zonas rurales tienen inadecuada prestación del servicio de agua potable y 3,2 millones no cuentan con acceso a ella. Existen graves riesgos de acaparamiento de recursos hídricos y tierras fértiles, por proyectos extractivos de carbón, petróleo y pilotos de fracking (5); por proyectos industriales como la producción de alimentos ultraprocesados y cultivos agroindustriales (6).

(1) AFP. Acuerdo Final de Paz, noviembre de 2016

(2) Indepaz (2022). Informe-Conflictos-Socioambientales-en-Colombia-final.pdf (indepaz.org.co), p.7

(3) Ibidem

(4) Ver el informe: InformeAndino-LibroBOL.pdf (cedib.org)

(5) PCDHDD. Informe sobre derecho al agua en Colombia. Fracking y explotación de carbón.

(6) La expansión de la agroindustria ha supuesto una gran inversión de agua. Según el último Estudio Nacional del Agua (2019), todas las actividades agrícolas usan el 43,07 % de la demanda hídrica nacional. Los pastos de corte para la ganadería (17,60 %), la palma de aceite (10,36 %) y la caña de azúcar emplean el (6,61 %) más de la tercera parte (34,57 %) de los 16.067 millones de metros cúbicos de agua que consumen al año.

Fracking. La fractura hidráulica consiste en “la inyección de un fluido compuesto por agua (91 %), arena (6 %) y aditivos químicos (3 %), a alta presión sobre la roca, para extraer hidrocarburos que están contenidos en la roca generadora” (7). Entre los riesgos ambientales se encuentran el elevado consumo de agua y contaminación de acuíferos, emisión de gases contaminantes, aumento de sismicidad y generación de desechos tóxicos (8). Durante el pasado Gobierno, se aprobaron Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPI) sobre Yacimientos No Convencionales, asociados a procesos de Fracturamiento hidráulico o Fracking que fueron rechazados por las comunidades y se encuentran suspendidos por la Autoridad Ambiental. Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking en aplicación del principio de precaución.

Amenazas de Arbitrajes de Inversión bajo el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista - Estado. Este mecanismo incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los Estados cuando estos adoptan cambios normativos, regulatorios, políticas públicas o decisiones judiciales en favor de derechos colectivos y ambientales. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, se registraron 12 demandas y 7 más en etapa previa, por un valor estimado de 9.8 billones de pesos. Estas demandas debilitan las políticas gubernamentales y los esfuerzos de las comunidades en defensa del ambiente sano, el territorio y el agua (9).

Crisis climática. En la evaluación, control y seguimiento ambiental de todos los proyectos extractivos, no hay inclusión del componente de gestión de la crisis climática, que es una obligación establecida en la normatividad nacional e internacional a fin de cumplir con los compromisos globales ambientales. Por otra parte, la Ley 2099 de 2021 contempla mecanismos alternativos de aprovechamiento energético. Sin embargo, estos continúan reproduciendo dinámicas de explotación del ambiente y de emisión de gases de efecto invernadero que no constituyen una verdadera transición (10). Asimismo, en 2021 se amplió el catálogo de delitos ambientales, creando tipos penales que favorecen la criminalización de poblaciones marginadas en las zonas de frontera agrícola (11).

(7) Ministerio de Ambiente. Proyecto de ley contra el fracking, aprobado en plenaria de Senado, abril 18 de 2023. En: Proyecto de ley contra el fracking, aprobado en plenaria de Senado - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co)

(8) WWF, 13 de agosto de 2022. Esto es lo que debes saber sobre el fracking y sus riesgos | WWF; AIDA Frenando la expansión del fracking en América Latina | Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) (aida-americas.org)

(9) Declaración Internacional Colombia. Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios. En: <https://sites.google.com/view/globalstatementcolombia/esp%C3%B1ol?authuser=0&pli=1>

(10) El Espectador. Maria Camila Bonilla. Las razones de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Transición Energética, 29 de enero de 2023. Disponible en: Las razones de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Transición Energética | EL ESPECTADOR

(11) La Ley 2111 del 2021 sustituyó el Título XII del Código Penal, y creó una nueva lista de tipos penales que buscan proteger el medio ambiente como bien jurídico. Varios delitos se mantienen de la legislación anterior, pero se crean nuevos como Ecocidio, Deforestación y Aprovechamiento ilegal de baldíos.

Recomendaciones

1. Implementar el Acuerdo de Escazú para la protección de personas defensoras del ambiente y garantizar la amplia participación ciudadana en asuntos ambientales.
2. Avanzar en la prohibición de fracking y otras técnicas agresivas con el ambiente o que pongan en riesgo ecosistemas sensibles.
3. Tomar acciones progresivas para superar la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en políticas relativas a planes de cierre que respondan a compromisos ambientales, participación de las comunidades y estándares de DDHH.
4. Modificar normas que agraven o no tomen en cuenta la emergencia climática.
5. Hacer una revisión de los Tratados Bilaterales de Inversión, los Tratados de Libre Comercio y todas las disposiciones internacionales que limitan el derecho a tomar acciones para la protección del ambiente.